

2003: Otro año de lucha por definir una integración popular en el Gran Caribe

*Richard A. Dello Buono**

Este ensayo pretende destacar algunos de los acontecimientos políticos más interesantes del año 2003 en materia de movimientos sociales en el Gran Caribe.¹ Se trata más específicamente de centrar la atención en el contexto de las organizaciones y agrupaciones políticas de la sociedad civil, cuyas reivindicaciones y protagonismo postulen posiciones vinculadas a la lucha en contra de la integración hegemónica y/o a favor de un proyecto alternativo de desarrollo que contemple una integración genuina. El teatro de contestación expresado en las resistencias activas a través de la región, se constituye en lo que podría denominarse la “globalización realmente existente”, algo que a la luz de lo acontecido en el 2003 pareciera exhibir fuertes tendencias hacia una eventual ingobernabilidad neoliberal. Las fuerzas sociales en lucha contra las variadas desgracias del neoliberalismo y sus asociados esquemas de integración hegemónica, constituyen los núcleos de una integración más genuina desde abajo, aunque todavía incipiente, cuyos integrantes se ven obligados a colaborar cada vez más en redes para alcanzar y consolidar sus objetivos.

La sintonía social de movilizaciones sectoriales, partidistas y cívicas ya es una parte innegable del panorama regional. Sin duda alguna, los obstáculos que enfrenta este surgimiento popular no resultan escasos, entre los cuales podríamos mencionar las desigualdades de clase, raza y género, la diversidad cultural y de idioma, las diferentes concepciones de lucha y los distintos imaginarios de la integración genuina, entre otros. De hecho, es innegable que muchos de los factores obstaculizadores de la consolidación de una visión y plataforma para la integración popular —por ejemplo, la persistente ambivalencia de los pueblos sobre la integración de los mundos anglos e hispanos—, se mantuvieron vigentes al acabar el año. Pero la implacable presión y las incesantes intervenciones por parte de la superpotencia hemisférica, tanto en el campo militar como en su manera de imponer los proyectos como el ALCA, el CAFTA y varios acuerdos bilaterales, han constituido una compleja e inminente amenaza a los sectores populares en lo económico, político, ecológico y cultural; algo que en su conjunto ha provocado una tendencia marcada hacia la coordinación de formas colectivas de resistencia y la visualización de una integración más solidaria.

Entonces, podríamos considerar de manera sinóptica que las tendencias protagonistas de la integración genuina experimentaron una modesta expansión en el 2003 en el Gran Caribe y se han expresado a través de

* Profesor de Sociología de la Universidad Dominica, Chicago, Estados Unidos, y profesor visitante de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

¹ Se incluyen en esta discusión del Gran Caribe, los países de América Central y Panamá, el Caribe insular y los países del G-3 (México, Colombia y Venezuela).

algunas modalidades determinadas, como en 1) la proliferación de los movimientos multisectoriales en una simultánea evolución hacia asumir un carácter político; 2) la creciente resistencia ante los esquemas neoliberales y los megaproyectos de la integración hegemónica; 3) el rechazo al militarismo estadounidense, tanto en este hemisferio como en el otro, y en 4) la paulatina evolución hacia la construcción de una visión de integración netamente popular.

El enfrentamiento de los movimientos multisectoriales con la globalización neoliberal

Como se observó en muchas partes del mundo, los movimientos sociales en contra de las políticas neoliberales siguieron cobrando fuerza en el Gran Caribe durante el transcurso del 2003. Así, América Central fue un teatro de protestas contra la privatización de servicios. Los trabajadores del sector público, maestros, trabajadores de salud y otros, reivindicaron contra el desmantelamiento del sector público como en Costa Rica, donde los empleados de la compañía de electricidad seguían en su lucha ya iniciada hace varios años contra la privatización de la luz, ahora por medidas parciales después de haber frenado anteriormente el intento de ponerla a la venta plena. En total, los esfuerzos por parte de los sindicatos han tenido como resultado la construcción de un frente amplio en contra de la privatización de todos los servicios básicos y la inminente implementación del CAFTA. Notable resultó la llegada de una delegación visitante del FMI en Honduras, enfrentada con fuertes protestas organizadas por la Coordinadora Nacional de la Resistencia Popular (CNRP) y el Bloque Popular en que se agrupan los intereses de sindicatos, consumidores, maestros y estudiantes.

Nicaragua también sostuvo varias protestas en defensa de la educación y la salud pública; en particular, ejerciendo presión sobre el gobierno para cumplir con sus obligaciones anteriormente acordadas de otorgar el 6 % del presupuesto público para la educación. En Panamá, una campaña montada por el gobierno para privatizar la Caja de Seguridad Social (CSS), iniciada el año previo, resultó en una dramática intensificación de enfrentamiento social en el 2003 con la destitución en septiembre de Juan Jované, el director de la CSS y defensor destacado de los servicios públicos en su país. Mientras en Belice, los sindicatos de maestros y trabajadores azucareros paralizaron efectivamente las escuelas y las fábricas en protesta del plan anunciado por el gobierno de reformar el sistema de seguridad social. En la República Dominicana, grupos como el Foro Ciudadano presionaban al gobierno en contra de sus políticas neoliberales. A los mediados de noviembre, hubo una huelga general contra tales políticas que se perfiló como un plebiscito sobre el neoliberalismo, teniendo una respuesta estimada al 95 % de efectividad y enfrentada una vez más por violencia policial y el uso de tropas del ejército.

Sin duda alguna, las pequeñas economías abiertas del Caribe insular seguían en el 2003 bajo la amenaza constante de los aplastantes procesos globalizadores que están reestructurando la región. En su conjunto, el Caribe sigue experimentando una marcada dependencia de los sectores

de exportación de materias primas, tanto en el agro como en los minerales, revelando así una gran debilidad frente al mercado global. Sólo el turismo ha quedado como una industria dinámica durante todo el período reciente, aunque la recuperación de este sector desde la crisis provocada por el 11 de septiembre del 2001 siguió siendo lenta en el 2003 por efecto reflejo de la guerra en Iraq. La disminución progresiva de la capacidad de los Estados nacionales para financiar los programas de bienestar social, junto con el aumento del desempleo resultante de la crisis económica, ha multiplicado todos los problemas sociales y ha dado como resultado una creciente presión sobre los gobiernos nacionales y la realización de protestas protagonizadas por los pueblos caribeños.

Las campañas populares en contra de la integración hegemónica

Mientras los sectores populares lucharon contra el modelo neoliberal, el 2003 fue un año en el cual la insistente imposición de fórmulas de integración hegemónica siguió su curso en toda América Latina y el Caribe. Ha sido un proceso con antecedentes relevantes en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el TLCAN (NAFTA), aún vigentes. La extensión y profundización de esta lógica podemos denominarla "NAFTA-tización" de los procesos integradores, algo que pretendió convertir la esencia de la integración regional en negociaciones de libre comercio.

En México, las protestas de campesinos y los pequeños/medianos productores rurales siguieron en el 2003, con el importante referente del décimo aniversario del TLCAN hacia el fin del año. Bajo la bandera de la consigna "El Campo no Aguanta Más", un amplio conjunto de agrupaciones exigió un acuerdo nacional para el campo que podría conducir a la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN. La persistente militarización de Chiapas también continuó provocando protestas del EZLN y sus simpatizantes, quienes prepararon la celebración de su décimo aniversario de alto perfil junto al del TLCAN, cuya entrada en vigencia el 1° de enero de 1994 se recibió con la insurrección zapatista. En cambio, Centroamérica pasó el año en negociaciones que culminaron al final del año con el Acuerdo de Libre Comercio de América Central (CAFTA). Las protestas contra el CAFTA a lo largo de las negociaciones del 2003, pusieron en relieve los impactos negativos que ese acuerdo acarrearía en los ambientes económicos, ecológicos, políticos y culturales.

Sin dudar, los enfoques principales de las protestas en el 2003 fueron el ALCA, el CAFTA y el Plan Puebla-Panamá (PPP). Tomando en cuenta el patrón preexistente en el TLCAN, el ALCA empezó a entenderse como un "NAFTA plus" en el cual, la lógica neoliberal puede seguir avanzando mediante la reducción brusca de la toma de decisiones de los Estados a través de la región. Así logran tener más sentido los megaproyectos de integración física, como el PPP. En los otros países del Gran Caribe, las actitudes acerca de estos esquemas de integración hegemónica fueron variadas. El gobierno de Venezuela siguió profundizando sus críticas a tales proyectos y, sobre todo, respecto del ALCA, aunque con una creciente polarización doméstica. En Colombia, el otro socio de los G-3,

la administración Uribe se posicionaba de manera firme al lado de Washington tanto en el tema del libre comercio como el terreno militar y geopolítico, algo sumamente condicionado por su dependencia por los armamentos en la consecución de la campaña contrainsurgente. Bogotá priorizó la negociación de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, mientras su gobierno también expresó su interés en construir una carretera para vincular Colombia con Panamá a través del Darién, algo que podría vincularse con el Plan Puebla-Panamá.

Mientras tanto, los países del Caribe insular debatieron, sobre todo, cómo ubicarse dentro del contexto del Acuerdo de Cotonou.² Esta búsqueda por una opción preferencial para las economías pequeñas se enfocó más en ganar algunas ventajas atractivas para las elites locales que en el propio desarrollo de sus países. La respuesta popular ha sido la de dudar permanentemente de la capacidad de las elites caribeñas para desarrollar una agenda que responda a los intereses populares ante los nuevos retos de la globalización. En este contexto, la profundización de la integración regional, a todos niveles, sigue estando en juego en el Caribe como una especie de solución.

En el 2003, la oposición al ALCA que culminó en Miami con la formulación del llamado "ALCA Light" marcó un ajuste de estrategia que privilegia el seguimiento del proyecto mediante la conclusión de acuerdos de comercio bilaterales (con Chile, Colombia y otros) y entre subregiones (por ejemplo, CAFTA). A través del hemisferio, pudo verse en el 2003 un intenso activismo expresado en plebiscitos populares, manifestaciones, encuentros nacionales y regionales, tribunales populares, foros y jornadas de protestas, organizado por la nueva generación de movimientos sociales supranacionales con bases nacionales en los sectores populares organizados. En vista de la resistencia política popular que en cada país puede constituirse en obstáculo a su implementación, está claro que Washington optó por seguir en una estrategia de no correr grandes riesgos en el corto plazo y evitar experimentar una estrepitosa derrota.

De manera semejante, las negociaciones para el acuerdo CAFTA anunciadas en el 2002 también se convirtieron en un punto de referencia de mucha protesta a lo largo del 2003. La actitud de los gobiernos involucrados revelada por la manera en que condujeron las negociaciones casi en secreto, también alimentó el rechazo popular y de hecho provocaba en algunos sectores de las elites el cuestionamiento de ciertos elementos del acuerdo. Como una versión del "ALCA adelantado", el CAFTA tiene la característica de fortalecer la asimetría entre Estados Unidos y sus contrapartes centroamericanas por vía de reducir la capacidad de sus Estados de regular las inversiones transnacionales. Esto significa un golpe anunciado a sus sistemas nacionales de agricultura —en especial, alimentos— y de

² El Acuerdo de Cotonou, firmado entre el Grupo de 77 países ACP (África, Caribe y Pacífico) y los 15 países miembros de la Unión Europea (UE) el 23 de junio del 2000 en Cotonou, Benin, fue el nuevo acuerdo de cooperación para sustituir a las Convenciones de Lomé que se encontraba vigente desde 1975 y establecía términos de la cooperación bilateral con las ex colonias. Los principales cambios se reflejan en la eliminación de las cuotas preferenciales de los acuerdos sucesivos de Lomé en armonización con los requisitos de las políticas comerciales de la OMC.

igual manera constituye una amenaza a los derechos laborales y sus protecciones ecológicas y soberanía sobre su biodiversidad. En fin, el CAFTA imposibilita prácticamente la formulación de una estrategia de desarrollo nacional o regional propia, y además facilita la aceptación posterior del ALCA por haber concebido por adelantado lo esencial.

El rechazo al militarismo estadounidense

La Doctrina Bush ha puesto gran énfasis en la utilización de su política exterior como arma para forzar una apertura comercial cada vez más amplia. Mediante el impulso de una nueva generación de acuerdos de libre comercio como el del ALCA, Washington ha intentado asegurar el acceso transnacional a los nuevos mercados de servicios vía su desregulación y las privatizaciones, así como garantizar el amplio reconocimiento de la propiedad intelectual, mantener el acceso a las materias primas bajo términos de intercambio permanentemente favorables y eliminar la capacidad de regulación económica por parte de los Estados nacionales. Se ha impulsado una amplia geopolítica evidentemente vinculada con las persistentes preocupaciones sobre el abastecimiento de petróleo, convirtiéndose la estrategia energética en factor determinante de la política exterior estadounidense. Cabe notar que, en el 2003, México figuró como el segundo país-proveedor de petróleo crudo en el mundo para Estados Unidos, con Venezuela en cuarto lugar, Colombia en el décimo y Ecuador en el doceavo.

Si una "hipermilitarización" de la política exterior Estados Unidos constituye la esencia de la llamada Doctrina Bush, cabe subrayar el unilateralismo y la arrogancia con que Estados Unidos ignora tanto a las instituciones regionales e internacionales, como al derecho internacional. Su endoso abierto a la política del "cambio de regímenes" y explícita preferencia por las "intervenciones preventivas", han sido objeto de protesta por todas partes del mundo. En fin, a través de la militarización, así como de los acuerdos de integración hegemónica, Washington pretende aliviar la precariedad de los regímenes neoliberales y establecer el nuevo contexto para las "intervenciones inevitables" del futuro, pues habrá logrado criminalizar a las fuerzas de oposición popular.

En el Gran Caribe, los planteamientos de este tipo de estrategia agresiva para fomentar la integración hegemónica aunada a una doctrina militarista, estuvieron en plena evidencia en el 2003, sometiendo a los gobiernos de la subregión a una nueva ola de presiones para aceptar su lugar en el "traspasito estadounidense". Dando continuidad al año previo, hubo grandes avances en la evolución del Plan Colombia, revelándose cada vez más las intenciones contrainsurgentes. También, se vieron los inicios de la novísima intervención en Haití, cuando en septiembre, Washington efectuó su paulatino retiro de apoyo al presidente Jean-Bertrand Aristide. Además, varios países receptores de ayuda militar estadounidense fueron amenazados de perder tal ayuda por no haber garantizado la inmunidad a los estadounidenses ante el Tribunal Penal Internacional. Este tipo de presión para exigir la impunidad internacional al personal militar estadounidense, sobre todo cuando circularon rumores a lo largo del 2003 sobre

atrocidades en Iraq (y en menor grado en Afganistán), así como sobre la práctica de tortura en bases de ambos países y en Guantánamo, aumentaron las reacciones inevitablemente contrarias por parte de los movimientos sociales de la región.

A pocas semanas de iniciarse la guerra en Iraq, hubo manifestaciones contra las preparaciones bélicas en casi todas partes del hemisferio; en especial, el Caribe, México y América Central. Al momento de invadir en marzo, Washington mantuvo públicamente que tenían el apoyo de 49 países, en una llamada "coalición de los dispuestos", que incluyó a Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá por parte del Gran Caribe. Desde luego, hubo varias protestas en la región contra la invasión de Iraq y la posterior ocupación militar, con algunas oponiéndose al envío de tropas y cooperantes por parte de Honduras, El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana, países que enviaron más de 300 individuos a Iraq en apoyo a las fuerzas de la ocupación.

De hecho, sólo los gobiernos de Cuba, Venezuela y México, junto a la mayoría de los países de CARICOM, lograron manifestar su pleno desacuerdo con la invasión de Iraq, mientras que los países de Centroamérica y Panamá sumados a la República Dominicana asumieron una postura de apoyo a Washington. La alianza de los gobiernos de Inglaterra y España con Washington, a pesar de la gran oposición popular en ambos países, tuvo resonancias en el Gran Caribe por ser los principales poderes ex coloniales de la subregión. Dado que la globalización neoliberal y la imposición de los esquemas de integración hegemónica albergan permanentes conflictos en aquellas áreas donde las relaciones Sur-Sur colisionan con los intereses del norte, el ambiente geopolítico producido por la intervención militar contra Iraq favoreció la aglutinación de oposición popular en América Latina y el Caribe contra la Doctrina Bush.

La incipiente visión de integración popular: Otro Gran Caribe es posible

¿Cuáles son las perspectivas de la resistencia popular ante la globalización neoliberal y la posibilidad de formar una alternativa a la luz de lo acontecido en el 2003? Consideramos que la globalización y la restructuración neoliberal han impuesto fuertes límites a los partidos políticos establecidos. Entre ellos, los más populistas siguen experimentando serios retos que los obligan a una autotransformación neoliberal y, por ende, favorecen la desintegración de sus bases tradicionales. Por el otro lado, varios de los movimientos revolucionarios de antes como el FMLN (El Salvador), el FSLN (Nicaragua), la Alianza Democrática (Colombia, antes M-19), la URNG (Guatemala), entre otros, se han convertido en partidos electorales antineoliberales de oposición sin mayor éxito. Quizá su papel más importante, hasta ahora, consiste en ofrecer una infraestructura política de apoyo a los crecientes movimientos sociales. Los partidos gobernantes de Cuba y Venezuela siguen siendo las más significativas excepciones en la subregión, ofreciendo los recursos del Estado a la resistencia Gran Caribeña.

En el 2003, los trabajadores del sector público han confirmado su *status* como un actor social importante en la nueva correlación de fuerzas sociales. También pudo observarse nuevos puntos de convergencia entre las expresiones organizadas de los sectores populares; por ejemplo, entre los sectores académicos y las redes supranacionales, entre los sindicatos y las organizaciones del agro, entre los pueblos indígenas y los grupos ecologistas, etc. Pareciera cada vez más claro que sólo una alianza de las agrupaciones organizadas de los sectores populares junto a las organizaciones multclasistas como las de los indígenas, las mujeres, los empresarios nacionales amenazados y los estudiantes, sería capaz de dar vida a un proyecto posible de integración alternativa. Pensamos que estas aglutinaciones se ven favorecidas en un contexto de protestas mundiales en contra del militarismo estadounidense.

De todas formas, las fuerzas populares integradoras pasaron el año mayoritariamente en el modo defensivo, luchando contra la integración hegemónica y las consecuencias de las políticas neoliberales. El fuerte cuestionamiento al ALCA en su ambiciosa forma original dio como resultado un cambio de estrategia hacia un ALCA Light, con más énfasis sobre los acuerdos bilaterales. Estimamos que la falta de una conciencia colectiva subregional en el Gran Caribe está vinculada a la carencia de conciencia colectiva regional. En el ámbito de progreso más proactivo, cabe destacar la divulgación del ALBA promovida por el gobierno chavista de Venezuela, la persistencia del socialismo en Cuba con su incesante compromiso a los principios de la soberanía y el antimperialismo, y las múltiples visiones provenientes de los foros sociales que mantienen el imaginario de una integración solidaria.

El Caribe insular tiene su propia historia acumulada de institucionalidad integradora, con organismos establecidos como el Mercado Común de la Comunidad Caribeña (CARICOM) y la más reciente Asociación de los Estados Caribeños (AEC). Casi todos los países del Caribe y los países angloparlantes en particular, tienen la experiencia de los movimientos populares a favor de la integración de las Antillas. La balanza neta de las fuerzas políticas en favor de la integración está en ascenso y puede percibirse en las declaraciones oficiales de CARICOM y la Asociación de Estados del Caribe una persistente base política en el imaginario popular de sus pueblos. Es decir, existen fuertes sentimientos en relación con que un Caribe unificado puede significar una opción viable para mejorar el desarrollo y la calidad de vida. *Que tipo* de integración constituye la verdadera cuestión y el enfoque de contestación para toda la región caribeña.